

Señor
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA CIVIL
E. S. D.

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA DIGNIDAD HUMANA, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD, Y REPARACIÓN INTEGRAL.

ACCIONANTES: DIEGO FERNANDO OCHOA TORRES, APODERADO DE ANA VICTORIA AMADO CASTAÑEDA Y JOSÉ ÁNGEL LEÓN GONZÁLEZ, DANIEL RICARDO LEÓN AMADO Y ANDRÉS FELIPE LEÓN AMADO.

ACCIONADA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA DE CASACIÓN PENAL.

HECHOS

1. El 12 de diciembre de 2007, en la vía Duitama-Sogamoso, cerca del municipio de Tibasosa, ocurrió un accidente en el cual un bus de placas XGC-565, afiliado a la empresa Coflonorte-Libertadores, fue consumido por el fuego.
2. Como consecuencia del accidente, hubo varios heridos y fallecidos, entre ellos el joven **MIGUEL ÁNGEL LEÓN AMADO**, hijo de los señores **ANA VICTORIA AMADO CASTAÑEDA** y **JOSÉ ÁNGEL LEÓN GONZÁLEZ**, y hermano de **DANIEL RICARDO LEÓN AMADO** y **ANDRÉS FELIPE LEÓN AMADO**.
3. El 20 de octubre de 2020, mediante sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Río, se declaró solidariamente responsables y se ordenó la reparación integral de los perjuicios causados a los accionantes por parte de **ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A., COFLONORTE, ALLIANZ SEGUROS S.A. y LOLA ESPERANZA MENDOZA SALINAS** por los perjuicios derivados de los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2007.
4. El día 30 de septiembre del presente año, los accionantes radicarón un derecho de petición ante **ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.**, solicitando el cumplimiento de la sentencia del 20 de octubre de 2020.
5. El 12 de noviembre del presente año, **ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.** respondió indicando que el recurso de casación interpuesto por la señora **LOLA ESPERANZA MENDOZA SALINAA** el 4 de agosto de 2022 impide el cumplimiento de la sentencia.
6. A la fecha, la Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal, no ha resuelto el recurso de casación interpuesto por la señora **LOLA ESPERANZA MENDOZA SALINAS**, generando una vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes.
7. La dilación injustificada en la resolución del recurso de casación ha impedido el cumplimiento de la sentencia condenatoria, lo que vulnera los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso, reparación integral, a la vida digna y al mínimo vital de los accionantes, quienes han esperado por más de 16 años desde la ocurrencia de los hechos trágicos.

DERECHOS VULNERADOS.

Me permito interponer la presente acción de tutela en contra de la **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**, por la vulneración grave de los derechos fundamentales de mis representados.

Mi intervención se fundamenta en la afectación directa y continua de los derechos a la dignidad humana (artículo 1 de la Constitución Política de Colombia), derecho al acceso a la administración de justicia (artículo 229 de la Constitución Política de Colombia), y derecho al debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política de Colombia)

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Acudo ante su despacho para solicitar la protección de mis derechos vulnerados los cuales han sido menoscabados de la siguiente manera:

- 1. Artículo 1 de la Constitución Política de Colombia:** El artículo 1 de la Constitución Política, establece que el derecho a la dignidad humana implica que todas las personas deben ser tratadas con respeto y consideración, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, como la pérdida de un ser querido en circunstancias de vulnerabilidad. De esta forma la prolongación del tiempo desde los hechos relacionados con el accidente los cuales sucedieron en el año 2007 junto con la ausencia de una decisión definitiva en la admisión o inadmisión del recurso de casación interpuesto por la señora **LOLA ESPERANZA MENDOZA SALINAS**, realizan una perpetuación en el dolor y sufrimiento emocional de los accionantes, pues, la falta de reparación integral afecta la estabilidad emocional y económica de los accionantes, quienes han visto comprometida su calidad de vida al enfrentar durante años una situación de incertidumbre y desprotección, vulnerando no solo su calidad de vida, sino también su derecho a una vida digna.
- 2. Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia:** Consagra el derecho al debido proceso, incluyendo la garantía de que los procesos judiciales se resuelvan dentro de un plazo razonable, conforme a los principios de celeridad, imparcialidad y equidad. En este contexto, la Corte Suprema de Justicia frente al recurso de casación ha incumplido con este principio al mantener durante más de un año, sin resolver la admisión o inadmisión del mismo, lo que constituye una vulneración directa al principio de celeridad procesal, constituyendo una dilación procesal injustificada. Esta situación vulnera la confianza legítima de los accionantes en el sistema judicial, afectando su derecho a una justicia pronta y efectiva. La inactividad judicial afecta la confianza legítima de los ciudadanos en el sistema judicial, vulnera el acceso a una justicia oportuna y niega el derecho de las víctimas a un proceso justo y oportuno.

- 3. Artículo 229 de la Constitución Política de Colombia:** El artículo 229 de la Constitución Política garantiza a todas las personas el acceso pleno y efectivo a los mecanismos judiciales para la defensa de sus derechos e intereses. Este derecho fundamental no solo implica la posibilidad de acudir a las autoridades judiciales, sino también la obligación del Estado de garantizar que los procesos judiciales se resuelvan de manera oportuna, eficiente y sin barreras injustificadas.

En el presente caso, la dilación de la Corte Suprema de Justicia al no decidir sobre la admisión o inadmisión del recurso de casación ha afectado gravemente este derecho, al impedir el cumplimiento de la sentencia proferida el 20 de octubre de 2020, que reconoció la responsabilidad de los demandados y ordenó la reparación integral de los perjuicios causados. La falta de resolución de la admisibilidad del recurso por más de un año no solo perpetúa la incertidumbre jurídica, sino que además retrasa injustificadamente el derecho de las víctimas a ser reparadas.

La omisión de la Corte en este caso constituye una barrera procesal que impide la realización efectiva de la justicia, afectando directamente a los familiares de la víctima fallecida. La ausencia de una respuesta judicial eficiente ha contravenido la obligación del Estado de actuar de manera diligente y garantizar el acceso efectivo a la justicia, vulnerando así los principios de celeridad y eficacia procesal.

PRETENSIONES

1. Se ordene a la Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal resolver sobre la admisión del recurso de casación, en un término perentorio, el recurso de casación interpuesto por la señora **LOLA ESPERANZA MENDOZA SALINAS** el 4 de agosto de 2022.
2. Se adopten medidas de reparación inmediata que garanticen el goce efectivo de los derechos fundamentales de los accionantes, en especial el acceso a la justicia y la dignidad humana.

PRUEBAS

1. Copia de la sentencia del 20 de octubre de 2020.
2. Copia del derecho de petición radicado el 30 de septiembre del presente año ante **ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.** y su respuesta del 12 de noviembre.
3. Poder conferido por **ANA VICTORIA AMADO CASTAÑEDA Y JOSÉ ÁNGEL LEÓN GONZÁLEZ, DANIEL RICARDO LEÓN AMADO Y ANDRÉS FELIPE LEÓN AMADO.**

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37 DE DECRETO 2591/91: JURAMENTO

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no se ha presentado ninguna otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos.

NOTIFICACIONES

Para efectos de notificaciones, recibo comunicaciones en la dirección Calle 20 No. 12-84, Centro Comercial Plaza Real, Oficina 237, Tunja, teléfono 3133903625 o al correo electrónico contacto@ochoatorresabogados.com.

Atentamente,



DIEGO FERNANDO OCHOA TORRES
C.C. No. 74.084.090 de Sogamoso
T.P. No. 180.692 del Consejo Superior de la Judicatura

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Departamento de Boyacá.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SANTA ROSA DE VITERBO
"PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA NACIÓN"

Ley 1128 de 2007

SALA ÚNICA

CLASE DE PROCESO	: CAUSA PENAL
RADICACIÓN	: 15537-31-89-01-2013-00028-04
PROCESADO	: ROGELIO SILVA SILVA
DELITO	: HOMICIDIO Y OTROS
MAGISTRADA PONENTE	: EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA

Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, veinte (20) de octubre de dos mil veinte (2020).

En escrito que antecede, la Dra. MARIANA ZAYAS PUERTO, apoderada sustituta de las víctimas LUIS EDUARDO IZQUIERDO CARDONA, LUZ DARY CARDONA DE IZQUIERDO y RODOLFO ALFREDO IZQUIERDO AVELLA, presenta renuncia al poder de sustitución otorgado por la apoderada principal, Dra. MARIA ALBERTINA AGUIRRE ALVARADO.

Como quiera que la referida renuncia fue remitida por la misma apoderada principal, de donde se presume su conocimiento sobre aquella, este despacho **ACEPTA** la renuncia efectuada, advirtiendo que desde la fecha **REASUME** como apoderada principal de las víctimas, la abogada principal Dra. MARIA ALBERTINA AGUIRRE ALVARADO, comuníquese esta determinación por el medio más expedito a los poderdantes.

Asimismo, para que tenga lugar la audiencia de lectura de auto, de conformidad con el artículo 178 de la Ley 906 de 2004 modificado por la Ley 1395/2010 artículo 90, **SEÑÁLESE** el día jueves cinco (05) de noviembre de 2020, a las diez de la mañana (10:00 a.m.). Dicha diligencia se llevará a cabo de manera virtual, atendiendo la situación de emergencia sanitaria que vive el país.

CLASE DE PROCESO:

CAUSA PENAL – CON PRESO

RADICACIÓN:

15531-89-001-2013-00028-04

ACUSADO:

ROGELIO SILVA SILVA

DELITO:

HOMICIDIO AGRAVADO Y OTRO

MAGISTRADO PONENTE:

EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA

AUDIENCIA LECTURA DE AUTO 05 DE NOVIEMBRE 10:00AM				
PROCESADO	ROGELIO SILVA SILVA	CARCEL DE COMBITA	epccombita@inpec.gov.co juridica.combita@inpec.gov.co videoconferencias.combita@inpec.gov.co	
DEFENSOR	WALTER OSWALDO MONTOYA	3144579593	walthermont@yahoo.com	
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE	COFLONORTE	7705815	Por intermedio del defensor	
APODERADO	YUBER FREDY FONSECA FUQUEN	3138714920	yuberfredy30@hotmail.com	
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE	QBE SEGUROS S.A		glicitaciones@qbe.com.co	
APODERADO	BRIAM STEVEN RAMIREZ FLOREZ	3214302448	briamsramirez08@outlook.com	
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE	ALLIANS SEGUROS		notificaciones@gha.com.co	
APODERADO	JESSICA DUQUE GARCIA GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA	3113432785	Jduque@gha.com.co notificaciones@gha.com.co	
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE	LOLA ESPERANZA MENDOZA SALINAS	3002002248	esperanza26_mendoza@yahoo.es	
APODERADO	CARLOS ANDRES DIAZ DIAZ	3058994014	carlosabogado123@gmail.com	
VICTIMA	LUIS EDUARDO IZQUIERDO CARDONA LUZ DARY CARDONA RODOLFO ALFREDO IZQUIERDO	3142554324 3002598526 3123365534	leduiz84@hotmail.com NO REGISTRA sogarodo@hotmail.com	

Señores:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SANTA ROSA DE VITERBO
E. S. D

REF. PROCESO: CAUSA PENAL

DELITO: HOMICIDIO AGRAVADO Y OTROS

PROCESADO: ROGELIO SILVA

RAD: 15531-31-89-001-2013-00028-04

MAGISTRADA PONENTE: EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA

Asunto: SUSTITUCIÓN DE PODER

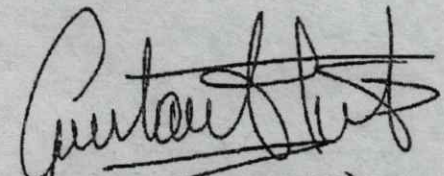
GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la C.C. No. 19.395.114 expedida en Bogotá, obrando en mi calidad de Apoderado de **ALLIANZ SEGUROS S.A.**, manifiesto que **REASUMO** el poder a mi conferido y, al tenor de lo preceptuado en el artículo 75 del Código General del Proceso, en el que se afirma que "*Podrá sustituirse el poder siempre que la delegación no esté prohibida expresamente.*" permitiendo además que "*...El poder conferido por escritura pública puede sustituirse para un negocio determinado, por medio de memorial*", mediante el presente escrito respetuosamente manifiesto que **SUSTITUYO** el poder a mi conferido al doctor **SANTIAGO RAFAEL TORRES ZAPATA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.019.105.099, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 329.402 del Consejo Superior de la Judicatura, para que intervenga en el presente proceso con todas las facultades a mi conferidas.

El doctor **SANTIAGO RAFAEL TORRES ZAPATA** queda investido con las facultades generales señaladas en la ley, las que inicialmente me fueron conferidas y las especiales de notificarse personalmente, recibir, conciliar, transigir, desistir, comprometer, sustituir, reasumir, renunciar, asistir a las audiencias, notificarse de todas las providencias, interponer recursos y en general, todas aquellas actuaciones necesarias para el buen cumplimiento de su gestión.

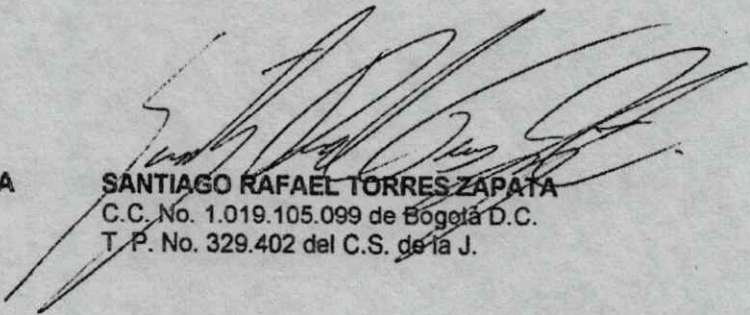
Respetuosamente solicito se le reconozca personería en los términos y para los fines aquí señalados.

Me reservo la facultad de reasumir el presente poder.

Acepto,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA
C.C. N° 19.395.114 de Bogotá
T.P. N° 39.116 del C. S. de la J.



SANTIAGO RAFAEL TORRES ZAPATA
C.C. No. 1.019.105.099 de Bogotá D.C.
T. P. No. 329.402 del C.S. de la J.

46

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1-019-105-099**

TORRES ZAPATA

APELLIDOS

SANTIAGO RAFAEL

NOMBRES

[Signature]

[Portrait Photo]

[Fingerprint]

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-FEB-1995**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

28-FEB-2013 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

[Barcode]

P-1500150-00431964-M-1019105099-20130417 0032740759A 1 40106078



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

**LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

C E R T I F I C A

Certificado de Vigencia N.: 325007

Page 1 of 1

Que de conformidad con el Decreto 196 de 1971 y el numeral 20 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente Tarjeta Profesional, previa verificación de los requisitos señalados por la Ley.

En atención a las citadas disposiciones legales y una vez revisado los registros que contienen nuestra base de datos se constató que el (la) señor(a) **SANTIAGO RAFAEL TORRES ZAPATA**, identificado(a) con la **Cédula de ciudadanía** No. **1019105099**., registra la siguiente información.

VIGENCIA

CALIDAD	NÚMERO TARJETA	FECHA EXPEDICIÓN	ESTADO
Abogado	329402	18/06/2019	Vigente
Observaciones:			

Se expide la presente certificación, a los **11** días del mes de **septiembre** de **2019**.

MARTHA ESPERANZA CUEVAS MELÉNDEZ
Directora

- Notas 1- Si el número de cédula, los nombres y/o apellidos presentan error, favor dirigirse a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
2- El documento se puede verificar en la página de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co a través del número de certificado y fecha expedición.
3- Esta certificación informa el estado de vigencia de la Tarjeta Profesional, Licencia Temporal, Juez de Paz y de Reconsideración

Carrera 8 No.12B -82 Piso 4. PBX 3817200 Ext. 7519 – Fax 2842127
www.ramajudicial.gov.co





TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

SANTA ROSA DE VITERBO

SECRETARIA SALA ÚNICA

ACTA No. 0040

En Santa Rosa de Viterbo, a los veintiséis (26) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020), siendo las nueve (9:45) de la mañana se reunieron los señores Magistrados integrantes de la Sala Cuarta de decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial, LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO, JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL y EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA, quien preside el acto como Magistrado Ponente, con el fin de discutir el siguiente proyecto:

Decisión emitida dentro de caso distinguido con el radicado 15531-31-89-001-2013-00028-04 contra ROGELIO SILVA SILVA, por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO y OTROS. Una vez abierta la discusión se procedió a dar lectura al proyecto, el cual fue aprobado por unanimidad, por consiguiente, se ordenó ponerlo en limpio.


En constancia firma:



EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA
Magistrado Ponente



LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO
Magistrada



JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL
Magistrado

3.- La anterior decisión fue recurrida en apelación y, mediante sentencia del 16 de abril de 2015 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo confirmó la providencia impugnada, asimismo, contra esta decisión se interpuso recurso extraordinario de casación, y una vez admitida la demanda, en sentencia del 09 de mayo de 2018 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió no casar la sentencia proferida por esta Corporación.

4.- El 05 de abril de 2016, previo a que se resolviera el recurso extraordinario de Casación, la abogada ALBERTINA AGUIRRE ALVARADO apoderada de *LUIS EDUARDO IZQUIERDO CARDONA, LUZ DARY CARDOZA DE IZQUIERDO y RODOLFO ALFREDO IZQUIERDO AVELLA* solicitó ante el Juzgado de conocimiento le diera trámite al incidente de reparación integral.

5.- Igualmente, el 25 de junio de 2018, el abogado RICARDO AGUILAR CAMACHO apoderado de *ANA VICTORIA AMADO CASTAÑEDA, JOSÉ ÁNGEL LEÓN GONZÁLEZ, ANDRÉS FELIPE LEÓN AMADO y DANIEL RICARDO LEÓN AMADO*, solicitó apertura de incidente de reparación integral.

6.- Finalmente, el 16 de agosto de 2018, el abogado AVELINO PLAZAS FIGUEREDO apoderado de los señores *JUYDITH, SANDRA NOHEMY, RODRIGO y CESAR HERNANDO CHAPARRO FIGUEREDO, ALCIRA LÓPEZ CAMACHO, GLADYS MIREYA ALDANA AFRICANO, JOSUÉ VELA MEDINA, MARIA AMANDA GIL GIL, DORIS AMPARO GÓMEZ ALBARRACÍN, MARLY DAYANA ALFONSO GÓMEZ, BLANCA CECILIA PIÑEROS, JOSÉ FLORIBERTO BLANCO y MIRIAM BALLESTEROS DE BLANCO* realizó la misma solicitud de apertura de trámite incidental.

7.- Devueltas las diligencias al Juzgado de primera instancia, mediante providencia del 24 de agosto de 2018 el Juzgado Promiscuo del circuito de Paz de Río admitió el incidente de reparación integral respecto de las víctimas representadas por los abogados ALBERTINA AGUIRRE ALVARADO y RICARDO AGUILAR CAMACHO. En lo que respecta a los apoderados del Dr. AVELINO PLAZAS FIGUEREDO, se indicó que había presentado la solicitud de apertura por fuera de los 30 días previstos en el C.P.P., y EN CONSECUENCIA solamente admitió el trámite a favor de MARLY DAYANA ALFONSO, por tratarse de menor de edad.

8.- La anterior decisión fue recurrida en reposición y subsidio el de apelación por el apoderado judicial de las víctimas a quienes se les negó la apertura de incidente,

12.- El 8 de mayo de 2019 se continuó con la primera audiencia de trámite y allí, previó a declararse fracasada la etapa de conciliación, las partes se ratificaron en sus pretensiones y solicitaron las pruebas tanto documentales como testimoniales que harían valer al interior del presente trámite incidental; en consecuencia, el despacho admitió las pretensiones económicas de las víctimas y se corrió traslado de las mismas al penalmente responsable, quién en la misma diligencia pidió perdón público.

13.- El día 29 junio 2019 se llevó a cabo la segunda audiencia de trámite, diligencia el interior de la cual se resolvieron las solicitudes presentadas, de forma previa, por los apoderados judiciales de ALIANZ SEGUROS S.A. y de la señora LOLA MENDOZA, quienes peticionaron que se dictara sentencia anticipada, la primera de ellas por considerar que carecía de legitimidad y la segunda, por estimar que en este proceso había acaecido el fenómeno jurídico de la caducidad. Al respecto, el despacho consideró que no era este el momento procesal oportuno para resolver la situación de falta de legitimidad propuesta por la aseguradora, toda vez que existe una relación contractual con COFLONORTE LTDA y en lo tocante a la segunda petición otorgó la palabra al abogado CARLOS ANDRÉS DÍAZ para que verbalizara su solicitud de prescripción y caducidad petición que se fundamentó en los siguientes argumentos.

13.1.- Considera el abogado de la señora LOLA MENDOZA, vinculada al trámite incidental en calidad de propietaria del vehículo, que en este caso es procedente dictar sentencia anticipada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del C.G.P., toda vez que se presenta el fenómeno jurídico de la caducidad conforme al artículo 106 del C.P.P.

13.2.- Al verificarse las diligencias se advierte que, en este asunto, la sentencia quedó ejecutoriada el día 16 de junio de 2018, esto es los 30 días después de proferida la respectiva decisión en la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que la providencia fue notificada en audiencia del 16 de mayo de 2018, fecha hasta la cual no se había presentado por parte de ninguna de las víctimas petición de apertura de incidente de reparación integral, circunstancia que hace evidente la caducidad del derecho a presentar el referido trámite.

14.- Corrido traslado a los demás sujetos procesales, las víctimas, al unísono, manifestaron oponerse a tal petición, tras considerar que el apoderado de la señora

su decisión de no casar la providencia dictada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo y desde entonces, contaban con un término máximo de 30 días para presentar la respectiva solicitud de incidente de reparación, término que fenecía el 29 de junio de 2018.

4.- Los abogados ALBERTINA AGUIRRE y AVELINO PLAZAS, presentaron la solicitud de apertura de incidente antes de que se prohiriera la respectiva sentencia en la Corte Suprema de Justicia, la primera, el día 05 de abril de 2016 ante el Juzgado de primera instancia y el segundo, el día 14 de febrero de 2017 ante la Corte Suprema de justicia.

5.- Que como bien se señaló, el término con que contaban las partes para solicitar la apertura era máximo de 30 días posteriores a la ejecutoria, pero nada impide que el mismo se presente con anterioridad, como en este caso lo hicieron las partes, pues una teoría en sentido contrario conllevaría un exceso de ritualidad manifiesto.

6.- Por su parte, las víctimas que inicialmente fueron representadas por el abogado LEONARDO DÍAZ, presentaron incidente de reparación integral el día 25 de junio de 2020, esto es, antes de que se venciera el término máximo de 30 días con que contaban

7.- En consecuencia, no puede estimarse que en este asunto ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad; máxime, cuando aún no se cumple el término propio del artículo 2358 del C.C. para presentar la acción civil contra terceros responsables.

DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión anterior, el defensor del sentenciado ROGELIO SILVA SILVA y los apoderados judiciales de los terceros vinculados LOLA ESPERANZA MENDOZA, COFLONORTE LTDA., QBE SEGUROS S.A. y ALLIANZ SEGUROS S.A. interpusieron recurso de apelación, así:

LOLA ESPERANZA MENDOZA SALINAS

A través de su apoderado judicial reiteró los argumentos inicialmente referidos al momento de presentar la solicitud e indicó que la sentencia condenatoria quedó

de incidente radicadas con anterioridad a la sentencia condenatoria, dejando un vacío frente a la sentencia de segunda instancia y la casación, las que pudieron ser absolutorias; sin embargo, aun así, decidió negar la petición de caducidad; tesis de la que discrepa, pues la posibilidad de dar apertura al incidente se genera con ocasión de los 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia de condena y es solo durante este término que procede la petición, sin que exista posibilidad alguna de iniciarse previo a proferir sentencia, circunstancia que advierte la situación extemporánea que se ha dado en este caso.

ALLIANZ SEGUROS S.A.

Precisó que el juzgado dio un alcance que no le corresponde a las normas que regulan el tramite incidental, esto con el fin de dar una interpretación errada acerca de la oportunidad que tienen las victimas para promover el incidente de reparación integral luego de la sentencia condenatoria, pues es claro que el término con el que cuentan para presentar la solicitud es de 30 días posteriores a la ejecutoria del fallo, lo que encuentra eco en el sentido común y normal devenir de los trámites, ya que el mismo es dependiente de los resultados del proceso penal y solo puede ejercitarse en caso de que este termine con sentencia condenatoria. De ahí que no resulte plausible la conclusión del juzgado de primera instancia, referente a que el incidente no se puede radicar antes de que quede en firme el fallo condenatorio, lo que equivale a pretender que el mismo pueda ejercer sin que se encuentre legal y fehacientemente soportada la responsabilidad penal que se discute. En consecuencia, cualquier solicitud que se radique antes o después de los 30 días posteriores o anteriores a la sentencia que haya quedado en firme, genera la caducidad de la acción.

Finalmente, solicitó, de manera subsidiaria, que no se condene en costas pues la sentencia anticipada no se encuentra dentro de los parámetros previstos en el artículo 365 del C.G.P.

DEFENSA DEL CONDENADO

Indica que la solicitud de incidente tiene un término de 30 días hábiles que corren a partir del día hábil siguiente al momento en que quedó en firme el fallo condenatorio, lo que quiere decir que cumplido dicho lapso, se pierde la posibilidad de la víctima

reparación por los perjuicios derivados de la conducta punible, así prevé el artículo 106 del C.P.P:

“ARTÍCULO 106. CADUCIDAD. La solicitud para la reparación integral por medio de este procedimiento especial caduca treinta (30) días después de haber quedado en firme el fallo condenatorio”.

Fijémonos, entonces, que el legislador estableció un término improrrogable de 30 días para la presentación del incidente de Reparación Integral, luego de ello, habría operado el fenómeno jurídico de la caducidad *entendido en este caso como el plazo perentorio y de orden público fijado por la ley, para el ejercicio de una acción o de un derecho, que transcurre sin necesidad de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico*².

Precisamente, sobre el término de caducidad transita la discusión en torno del recurso de apelación que ocupa la atención de esta Sala, pues los sujetos pasivos del trámite incidental, estiman que el término de 30 días de que trata el artículo 106 del C.P.P. feneció sin que las partes ejercitaran su derecho, de suerte que el mismo ha caducado en los términos de la referida norma.

No existe discusión, pues así lo determina la prueba documental que obra en el plenario, que la sentencia condenatoria que fue proferida en el proceso de la referencia, quedó ejecutoriada el día 16 de mayo de 2018, fecha en la cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia notificó en estrados la decisión del 09 de mayo de 2018, por medio de la cual resolvió no casar la providencia emitida el 16 de abril de 2015 por esta Corporación y, en consecuencia, confirmar la sentencia del 26 de septiembre de 2014 emitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Río, que condenó a ROGELIO SILVA por el delito de Homicidio Agravado, tentativa de homicidio agravado, ambos en concurso homogéneo, que a su vez concursan de manera heterogénea con la conducta de incendio, esto teniendo en cuenta que si bien con posterioridad la actuación ingresó al despacho del magistrado EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER para la aclaración de voto, esta se profirió el mismo 16 de mayo de 2018 y, en todo caso, tal acto de no tiene la virtualidad de alterar la ejecutoria del fallo, ya que la misma ni modifica la decisión ni permite la interposición de recursos a las partes.

² Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-250 de 2011.

Para resolver tal litigio, debemos acudir, una vez más al texto del artículo 106 de la Ley 906 de 2004, norma que prevé el término de caducidad del incidente de reparación integral según el cual, *“La solicitud para la reparación integral por medio de este procedimiento especial caduca treinta (30) días después de haber quedado en firme el fallo condenatorio”*

Mírese como, la referida norma ha previsto un término máximo para el ejercicio de la solicitud de reparación, transcurrido el cual, la víctima pierde el derecho a que su petición de reparación sea atendida ante la jurisdicción penal, por ello, la Corte Constitucional ha entendido la *caducidad como un límite temporal de orden público, que no se puede renunciar*, sin embargo, como término máximo que es, únicamente, puede ser atendida bajo la consideración de un extremo temporal máximo, que no impide que el derecho se peticione de forma previa, como se pasa a exponer.

Sabido es, que la procedencia del trámite incidental que propende por la reparación de los perjuicios ocasionados con el delito, como fuente de obligación que es, presenta dos requisitos para su procedibilidad, (i) la existencia de la sentencia condenatoria en firme y (ii) que medie solicitud de parte, ya sea víctima, Ministerio Público o Fiscalía, así lo contempla el artículo 102 del C.P.P.

ARTÍCULO 102. PROCEDENCIA Y EJERCICIO DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL. *En firme la sentencia condenatoria y, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal o del Ministerio Público a instancia de ella, el juez fallador convocará dentro de los ocho (8) días siguientes a la audiencia pública con la que dará inicio al incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y ordenará las citaciones previstas en los artículos 107 y 108 de este Código, de ser solicitadas por el incidentante.*

Sobre este segundo requisito, esto es, la solicitud de parte, la misma puede ser catalogada como un trámite informal, que apenas exige la manifestación del interesado en que se de apertura al incidente por quien se encuentra legitimado para ello; y aunque es claro que dicha solicitud únicamente puede dársele el trámite una vez ejecutoriado el fallo, no existe norma alguna que impida su presentación de manera previa, ni mucho menos que castigue la actividad precedente de la parte, siempre y cuando su petición no haya sido resuelta de fondo.

Recuérdese al respecto que la obligación de la administración de justicia se contrae en atender las solicitudes de trámite que los usuarios judiciales efectúan, conforme a los procedimientos legalmente previstos para ello, de ahí que una vez ingresa la solicitud, esta debe obtener respuesta que resuelva lo peticionado.

Así las cosas, la decisión del A quo al negar la solicitud de caducidad resulta acertada y acorde con los parámetros legales, por lo mismo debe ser confirmada.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la SALA CUARTA DE DECISIÓN DE LA SALA ÚNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ,

RESUELVE:


PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

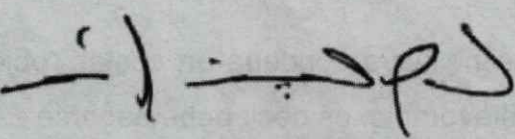
Las partes quedan notificadas en estrados.



EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA
Magistrado Ponente



LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO
Magistrada



JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL
Magistrado


85

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE
VITERBO, BOYACÁ,


RESUELVE:

NEGAR la solicitud de adición de la providencia de segunda instancia, lo mismo que la petición que se había hecho, a través del recurso para que fueran exonerados en costas. Contra esta providencia no procede ningún recurso


De esta providencia las partes quedan notificadas en estrados.



EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA
Magistrado Ponente



LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO
Magistrada



JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL
Magistrado



TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL
SANTA ROSA DE VITERBO
SALA ÚNICA

ACTA N° 148 VIRTUAL

Sala de Decisión	CUARTA
Magistrado Ponente	DR. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA
Fecha:	05 DE NOVIEMBRE DE 2020
Radicación:	15531-31-89-001-2013-00028-04
Procesado:	ROGELIO SILVA
Delito:	HOMICIDIO
Audiencia	LECTURA DE SENTENCIA
Hora Inicio:	10:13 am
Hora Finalización:	

AUDIENCIA LECTURA DE SENTENCIA
SEGUNDA INSTANCIA

Partes e intervinientes presentes:

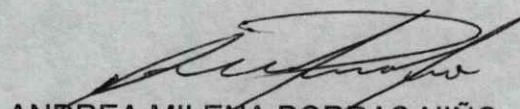
Magistrado: Dra. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA

Se deja constancia que se hacen presentes de manera virtual el Doctor EURIPÍDES MONTOYA SEPÚLVEDA en calidad de Magistrado Ponente los Doctores LUZ PATRICIA ARISTIZABAL GARAVITO y JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL no asisten y delegan su lectura en el ponente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 de la ley 906 de 2004. Una vez instalada la presente audiencia y verificada la asistencia de las partes se procede a dar lectura a la decisión, la cual en su parte resolutive reza:

NEGAR la solicitud de adición de la providencia de segunda instancia, lo mismo que la petición que se había hecho, a través del recurso para que fueran exonerados en costas. Contra esta providencia no procede ningún recurso

De esta providencia las partes quedan notificadas en estrados.

La presente causa penal se suscribe únicamente por parte de la secretaria.


ANDREA MILENA PORRAS NIÑO
Citadora

AUDIENCIA 13 DE AGOSTO

https://etbcsj-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/tstribsupsrv_cendoj_ramajudicial_gov_co/EXKm9ibnDo5Kht5j-mX91u0B1utF_Y1uT237RmEU8wE2eQ?e=48oumq

AUDIENCIA 05 DE NOVIEMBRE

https://etbcsj-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/tstribsupsrv_cendoj_ramajudicial_gov_co/EeUrz-vBbHNEt708T4gtWFYBDckTWBbBZmx9MDG7lxtbZA?e=VCnydQ

Señores
ZURICH COLOMBIA S.A
Ac. 100 # 7-33.
Bogotá D.C, Colombia.

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DERIVADO DE SENTENCIA JUDICIAL.
PROCESO: 155373189001201300002807

DIEGO FERNANDO OCHOA TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.080.090 de Sogamoso y Tarjeta Profesional No. 180.692 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado judicial de de las víctimas **ANA VICTORIA AMADO CASTAÑEDA, JOSÉ ÁNGEL LEÓN GONZÁLEZ, ANDRÉS FELIPE LEÓN AMADO Y DANIEL RICARDO LEÓN AMADO (MADRE, PADRE Y HERMANOS DEL FALLECIDO MIGUE ÁNGEL LEÓN AMADO)**, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 1755 de 2015, comedidamente me permito presentar la petición que más adelante se describe, previa narración de los siguientes

HECHOS:

1. Mediante sentencia condenatoria emitida el 20 de octubre del año 2020 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Río, se declaró a la empresa ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A., como responsable solidariamente junto con otros responsables.
2. Se condenó a ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A a la reparación integral por los perjuicios causados a mis representados, derivada del trágico incendio del bus de placa XGC-565 de Sogamoso, ocurrido el 12 de diciembre de 2007, en el cual perdió la vida el señor **MIGUEL ÁNGEL LEÓN AMADO**.
3. A la fecha, la sentencia condenatoria dentro de la cual se encuentra la reparación integral de perjuicios no ha sido cumplida por parte de ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
4. La sentencia judicial de fecha 20 de octubre del año 2020, ordena el pago por concepto de la suma de CUATROCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS (405.000.000\$) por concepto de dolor de la pérdida de un ser querido por presunción legal, discriminados de la siguiente forma:
 - CIEN SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (100 smmlv) pagados a la señora **ANA VICTORIA AMADO CASTAÑEDA**. Mama del señor **MIGUEL ÁNGEL LEÓN AMADO** Q.E.D.P.
 - CIEN SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES (100 smmlv) pagados al señor **JOSE ANGEL GONZALEZ**. Papa del señor **MIGUEL ÁNGEL LEÓN AMADO** Q.E.D.P.
 - CINCUENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES (50 smmlv) pagados al señor **ANDRES FELIPE LEON AMADO**. Hermano del señor **MIGUEL ÁNGEL LEÓN AMADO** Q.E.D.P.
 - CINCUENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES (50 smmlv) pagados al señor **DANIEL RICARDO LEON AMADO**. Hermano del señor **MIGUEL ÁNGEL LEÓN AMADO** Q.E.D.P.

SOLICITUDES

Con fundamento en lo anterior, solicito respetuosamente a **ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.** realizar el pago correspondiente a la indemnización ordenada en la sentencia mencionada a favor de mis representados: **ANA VICTORIA AMADO CASTAÑEDA, JOSÉ ÁNGEL LEÓN GONZÁLEZ, ANDRÉS FELIPE LEÓN AMADO Y DANIEL RICARDO LEÓN AMADO.**

De igual forma solicito que el pago se efectué dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de este derecho de petición. En caso de no dar cumplimiento de la obligación judicial, so pena de inicia acciones judiciales concernientes a la solicitud de embargo y secuestro de los bienes, enseres y cuentas bancarias que se encuentren bajo la titularidad de la empresa **ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.**, con el fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia y la reparación a mis representados.

FUNDAMENTO JURÍDICO

Esta petición se fundamenta en el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, en el Código General del Proceso en su artículo 283, el cual establece lo siguiente:

CONDENA EN CONCRETO.

ARTÍCULO 283. CONDENA EN CONCRETO...En todo proceso jurisdiccional la valoración de daños atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales...

NOTIFICACIONES

Para cualquier notificación o comunicación adicional, puede contactarme en la dirección Calle 20 No. 12-84, Centro Comercial Plaza Real, Oficina 237, en la ciudad de Tunja. También puede comunicarse a los números de celular 3133903625 o 3173329949, y/o al correo electrónico contacto@ochoatorresabogados.com.

Atentamente,



DIEGO FERNANDO OCHOA TORRES
C.C. NO. 74.066.090 DE SUGAMOSO
T.P. NO. 180.692 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

Anexo: Sentencia del 21 de junio de 2019.





Bogotá, 12 de noviembre de 2024

Doctor

DIEGO FERNANDO OCHOA TORRES

Apoderado judicial de Ana Victoria Amado Castañeda, José Ángel León Gonzales, Andrés Felipe León Amado y Daniel Ricardo León Amado.

contacto@ochoatorresabogados.com

Tel. 3133903625

REFERENCIA: Respuesta por parte de ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. al derecho de petición, remitido por vía correo electrónico el día 30 de septiembre de 2024.

Cordial saludo,

En atención al derecho de petición radicado vía correo electrónico el día 30 de septiembre de 2024 ante ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A., mediante el cual se solicita el pago derivado de la sentencia judicial del proceso N.º 155373189001201300002807, nos permitimos informarle que no es posible atender la solicitud toda vez que las condenas impuestas en la sentencia de segunda instancia del 03 de agosto de 2022 actualmente no son ejecutables.

Dicha circunstancia fue advertida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo mediante auto del 10 de marzo de 2023 donde se resolvió:

"ADICIONAR el auto proferido el 06 de febrero de 2023 al interior del presente asunto en el sentido de NEGAR la solicitud de aplicación del inciso quinto del artículo 341 del C.G.P, efectuada por el apoderado judicial de víctimas."

Pues bien, el pasado 04 de agosto de 2022 por el apoderado de Lola Mendoza Salinas, es decir, una de las incidentadas, presentó el recurso de casación en el trámite de un proceso penal. De tal forma, la Corporación declaró no ejecutables las condenas impuestas en la sentencia de segunda instancia proferida el 03 de agosto de 2022. Lo anterior comoquiera que el efecto al que hace referencia el inciso quinto del artículo 341 C.G.P el cual regula el recurso de casación en materia civil, no es extensivo al ámbito penal.

Cordialmente,

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.



OCHOA TORRES &
ABOGADOS ASOCIADOS

Señor

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA CIVIL

E. S. D.

ASUNTO: OTORGAMIENTO DE PODER.

ANA VICTORIA AMADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.363.863, **JOSÉ ANGEL LEON GONZALEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.533.205, **DANIEL RICARDO LEON AMADO**, identificado con cédula de ciudadanía 1.057.593.420 y **ANDRES FELIPE LEON AMADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.057.587.823, por medio del presente escrito manifiesto que otorgo poder especial amplio y suficiente con autorización expresa al abogado **DIEGO FERNANDO OCHOA TORRES**, debidamente identificado con la cédula de ciudadanía No 74.080.090 de Sogamoso y Tarjeta Profesional 180.692 del Consejo Superior de la Judicatura, para que, en nuestro nombre y representación, presente tutela en contra de la **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA DE CASACIÓN PENAL**.

Otorgó,

Ana Victoria Amado c
ANA VICTORIA AMADO
C.C No. 46.36.8.63.

José Angel Leon Gonzalez
JOSÉ ANGEL LEON GONZALEZ
C.C No. 9.533.205



OCHOA TORRES &
ABOGADOS ASOCIADOS

DANIEL RICARDO LEON AMADO
C.C No. 1.057.593.420

ANDRES FELIPE LEON AMADO
C.C No. 1.057.587.823

Acepto,

DIEGO FERNANDO OCHOA TORRES
C.C No 74'081.050 de So. Amoso
T.P 180.69 del C. S de So. Amoso

Notificaciones en la dirección calle 20 No. 12-84 centro comercial plaza real oficina 237 de la ciudad de Tunja, celular 3133903625 ó 3173329949, Teléfono: 7454147 E-mail contacto@ochoatorresabogados.com